

**Caracas, 19 de junio de 2020**

Cuestionario conjunto de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales

**La protección de los derechos humanos durante y después de la COVID-19**.

* Sírvase explicar los efectos de la pandemia en el disfrute de los derechos humanos y qué medidas ha adoptado el Estado para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

Espacio Público registró múltiples violaciones al derecho a la libertad de expresión. Para **el periodo del 16 de marzo, fecha en que inició la cuarentena en todo el país, hasta el 14 de junio de 2020, se registraron 146 casos, lo que representa 339 denuncias de violaciones al derecho**[[1]](#footnote-1).

Entre los **meses de enero-febrero se presentaron 30 y 27 casos, respectivamente, lo que suma una totalidad de 57.** Mientras que para los meses de **marzo-abril se presentaron 62 y 43 casos, respectivamente, lo que suma una totalidad de 105**. Cabe destacar que el 58% de los casos en el mes de marzo se presentaron luego del decreto de estado de alarma, desde el 16 de marzo hasta el 31 del mismo mes.

Esta situación general demuestra que el Estado venezolano sigue sin tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Luego de decretar el estado de alarma, el Estado recrudeció la situación del derecho en el país, donde busca perseguir cualquier expresión incómoda para el gobierno de turno.

* ¿Se han adoptado medidas en su país durante la pandemia que hayan tenido un efecto limitador sobre los derechos humanos? En caso afirmativo, sírvase enumerarlas, dar una explicación de su adopción e indicar el plazo en que se levantarán.

**Decisiones tomadas por el Estado frente a la COVID-19**

1. **Estado de alarma**

Para el 13 de marzo de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro decretó el estado de alarma por la presencia del COVID-19 en Venezuela durante treinta (30) días[[2]](#footnote-2). La medida se hizo efectiva de inmediato, sin embargo se hizo pública por los medios oficiales cuatro días después.

Este estado de alarma se prorrogó por treinta (30) días más, en fecha 12 de abril de 2020[[3]](#footnote-3). A pesar de haberse cumplido el plazo, el ejecutivo decidió extender el estado de alarma, por segunda vez, el 12 de mayo de 2020 durante treinta (30) días más[[4]](#footnote-4); y su respectiva prórroga por la misma cantidad de días, el 11 de junio de 2020[[5]](#footnote-5).

La falta de transparencia en las medidas tomadas por el Ejecutivo genera incertidumbre de cuándo se levantarán las mismas; hasta ahora, solo se ha presentado una flexibilización de la cuarentena con un esquema de 7x7 (siete días de flexibilización y siete días de cuarentena)[[6]](#footnote-6).

De acuerdo al artículo 337 de la Constitución de Venezuela, el estado de alarma no puede suspender los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. A pesar de ello, en los respectivos decretos, en el artículo 9, con relación a los supuestos que no serán objeto de suspensión de garantías, no se contempló ninguna actividad relacionada al derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión.

Cabe destacar, que la Asamblea Nacional tiene un papel fundamental dentro de los decretos de estados de alarma, como ente contralor de los actos del Ejecutivo. De acuerdo al artículo 338 de la Constitución *“La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional”*. No obstante, estos decretos nunca fueron sometidos a control por parte de la Asamblea Nacional.

1. **Decisión del Tribunal Supremo de Justicia**

La situación se agrava cuando el Tribunal Supremo de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, declara la supuesta constitucionalidad de los decretos emitidos por el gobierno, sin tomar en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos.

Se han emitido distintas decisiones en fechas: **1)** 24 de marzo de 2020, sentencia Nº 0057[[7]](#footnote-7); **2)** 22 de abril de 2020, sentencia Nº 0058[[8]](#footnote-8); **3)** 21 de mayo de 2020, sentencia Nº 0063[[9]](#footnote-9); **4)** la sentencia para declarar la constitucionalidad del último decreto no se ha publicado.

A continuación, se hará una transcripción parcial de dichas sentencias, en particular, la sentencia del 24 de marzo de 2020. En este sentido, la Sala Constitucional determinó con relación al derecho a la información y el estado de alarma decretado:

*“el decreto de Estado de Alarma busca garantizar la protección de la sociedad, ante tan grave situación como lo es una pandemia (...) el Estado debe garantizar a toda persona el goce de los derechos humanos tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*

*(...)*

*El decreto, asimismo, resguarda y, por ende, no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional, a saber, las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, tal como lo disponen los artículos 337 del Texto Fundamental y 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.*

*(...)*

*En conclusión, examinado como ha sido el Decreto 4.160 de fecha 13 de marzo de 2020, publicado en la Gaceta oficial N° 6.519 Extraordinario, evidencia esta Sala Constitucional que cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”*. (Cursivas y subrayado propios)

Tal como se mencionó anteriormente, el decreto no contempla dentro de sus excepciones de suspensión, en su artículo 9, las actividades relacionadas al derecho a la información. Referente a este artículo, la Sala Constitucional avaló la inconstitucionalidad del estado de alarma, al no pronunciarse sobre aquellas actividades relacionadas al derecho a la información que no pueden suspenderse y que en el decreto no fueron mencionadas.

1. ¿Por qué fueron necesarias estas medidas para responder a la situación de COVID-19?

No se niega la necesidad de tomar las medidas correspondientes para garantizar el derecho a la salud y a la vida frente a una situación de pandemia por la Covid-19. No obstante, ello se hizo en detrimento de otros derechos humanos, como la libertad de expresión. En la práctica, como se verá más adelante, se configuró una situación donde las violaciones al derecho aumentaron y diversificaron en el contexto de la pandemia.

Es importante recordar que el Estado venezolano sostiene hasta la fecha un estado de excepción previo, prorrogado desde el 14 de enero de 2016, bajo la modalidad de “estado de emergencia económica” a la que luego se sumó en mayo del mismo año un “estado de excepción”, bajo razones de orden social y político; todo ello a pesar de que el artículo 336 de la Constitución establece que la duración será de hasta sesenta días (60), prorrogable por un plazo igual, es decir, un máximo de 120 días.

En los cuatro años de duración de la medida, se consolidó la hiperinflación económica, se agudizaron las represalias[[10]](#footnote-10) hacia sectores políticos de oposición, y hacia ciudadanos/as por cuestionar públicamente al gobierno. En 2016 se suspendieron las elecciones regionales sin mayores justificaciones por parte de las autoridades; en 2017 se convocó de forma ilegal una asamblea nacional constituyente[[11]](#footnote-11) con facultades para legislar, este ente sancionó una “ley contra el odio”[[12]](#footnote-12) que no cumple con el test tripartito, y es usada para criminalizar el discurso crítico. Entre 2018 y 2019 Espacio Público registró unos 25 casos de intimidación, amenaza o privación de libertad por “delitos de odio”.

1. ¿Tenían esas medidas efectos discriminatorios en diversos grupos de la población? En caso afirmativo, sírvase indicar cuáles y por qué.

Para demostrar el efecto discriminatorio de estas medidas contra “opositores”, se debe hacer una mención contextual a la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

1. **Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela**

Las violaciones a la libertad de expresión siguen siendo sistemáticas con la declaración de estado de alarma en Venezuela por motivo del Covid-19.

Previo a la declaración de la cuarenta, el Estado buscó controlar la información que circulaba en Venezuela con referencia al virus, se persiguió a personas que informaron sobre la situación. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, amenazó a los trabajadores de la salud del estado tras alertar públicamente sobre la posible presencia de un caso en Maracaibo[[13]](#footnote-13).

Luego del inicio de la cuarentena el 16 de marzo, hasta el 31 de marzo, se registraron un total de 36 casos, que se traducen en 76 violaciones al derecho. Las violaciones directas e indirectas a la libertad de expresión afectaron principalmente a los periodistas. Los principales victimarios eran cuerpos de seguridad por medio de la intimidación[[14]](#footnote-14) y la censura[[15]](#footnote-15).

El 17 de marzo, **Julio Molina**, trabajador de la salud fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana por denunciar las condiciones del Hospital Núñez Tovar, en Maturín. Así mismo, al menos 18 personas fueron detenidos arbitrariamente por ejercer la libertad de expresión: 1) Uno de ellos fue el periodista **Darvinson Rojas**, quien tiene un procedimiento penal en curso y; 2) **Rosali Hernández** también fue detenida arbitrariamente, la obligaron a borrar el material, le quitaron sus equipos y credenciales, y le informaron que “nadie está autorizado de grabar ni en ese ni en ningún otro lugar”[[16]](#footnote-16).

Para el mes de abril se suman 43 casos, que corresponden a 110 violaciones al ejercicio del derecho de la libertad de expresión[[17]](#footnote-17).

Uno de los casos fue **Andrea Sayago**, bionalista del hospital Pedro Emilio Carrillo, detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por difundir información de posibles casos de COVID-19 en el estado Trujillo[[18]](#footnote-18). Le imputaron el delito de uso indebido de información privilegiada a cargo de funcionario público, traición a la patria e instigación al odio y una medida cautelar de casa por cárcel.

La falla de servicios públicos también es parte del debate público que se presenta en Venezuela. El Estado reacciona por medio de la persecución hacia personas que denuncian o informan sobre el estado de estos servicios.

En el estado Guárico detuvieron a **Arnaldo Sumoza**, director de la TV Regional Canal 15, por reportar una protesta por las fallas en el servicio de agua; fue imputado por los supuestos delitos de “alteración al público e incumplimiento de la Gaceta (medidas sanitarias por el Covid-19)”[[19]](#footnote-19).

En el mes de mayo se registraron 49 casos, que se traducen en 112 violaciones[[20]](#footnote-20). La intimidación y la censura siguen siendo el tipo de violación más frecuente. El caso de la residente del hospital Adolfo D’Empaire, **Andreina Urdaneta Martinez** genera preocupación por la creciente persecución a personas que difunden información en medios de comunicación privada. Ella fue detenida y posteriormente excarcelada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (CICPC) por la supuesta publicación de un estado en *Whatsapp*, en el que mostraba descontento contra Nicolás Maduro [[21]](#footnote-21).

Un acontecimiento importante en Venezuela, fue la salida de la empresa de servicios de televisión por suscripción *DirecTV*. A causa de ello, fotógrafos de ***El Pitazo***,***EFE*** y uno independiente fueron intimidados por funcionarios de la GNB en las adyacencias de Directv, en la urbanización el Rosal, Caracas, por la supuesta violación del perímetro de seguridad. Al periodista de *El Pitazo* lo obligaron a borrar su material [[22]](#footnote-22).

Con relación al Covid-19 y las medidas derivadas de la contingencia por la presencia del virus en Venezuela, desde el 16 de marzo hasta el 14 de junio del presente año, se registraron 80 casos, lo que representa un total de 192 violaciones. Los tipos de violación a la libertad de expresión que se presenta con mayor frecuencia son la intimidación, con un 40,4% y la censura el 25,52%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Violación por tipo** | **Total** | **%** |
| Intimidación | 77 | 40,10 |
| Censura | 49 | 25,52 |
| Amenaza | 19 | 9,90 |
| Hostigamiento judicial | 18 | 9,38 |
| Restricción administrativa | 17 | 8,85 |
| Agresión | 6 | 3,13 |
| Hostigamiento verbal | 6 | 3,13 |
| **Total general** | **192** | **100** |

En total, se presentaron 50 privaciones arbitrarias de libertad, entre detenciones de corta y larga duración. Las personas más afectadas son ciudadanos/as que no se dedican profesionalmente a la comunicación, que emiten opiniones o informar sobre hechos de interés público, seguidos de periodistas o reporteros/as; con un total de 34% y 26% de los casos, respectivamente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Detención/retención por ocupación** | **Total** | **%** |
| Particular | 17 | 34,00 |
| Periodista/reportero | 13 | 26,00 |
| Conducto | 4 | 8,00 |
| Reportero gráfico | 4 | 8,00 |
| Trabajador de la salud | 4 | 8,00 |
| ONG/miembro | 3 | 6,00 |
| Camarógrafo/técnico | 2 | 4,00 |
| Locutor | 2 | 4,00 |
| Miembro de la iglesia | 1 | 2,00 |
| **Total general** | **50** | **100** |

**Libertad de expresión con relación al servicio de distribución de gasolina**

Desde el 16 de marzo hasta el 14 de junio de 2020, se registraron 22 casos relacionados al ejercicio de la libertad de expresión con relación a la cobertura del suministro de combustible, lo que se traduce en 53 tipos de violaciones. Frente a este tipo de casos, 16 personas fueron detenidas, destacan mayormente los periodistas/reporteros. Los principales victimarios son los cuerpos de seguridad.

**Eduardo Galindo** fue detenido y víctima de malos tratos junto a su familia por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)[[23]](#footnote-23) de Apure, presuntamente por replicar información sobre la distribución de gasolina por los militares; sus abogados aún no tienen acceso al expediente. El caso fue denunciado ante diversos Relatores de Naciones Unidas.

La persecución por ejercer la libertad de expresión en las redes sociales se mantiene. En Anzoátegui, **José Vázquez**, de profesión taxista, fue detenido por funcionarios de la GNB, tras manifestar su descontento, y expresar en *Facebook* y *Whatsapp* que iba a protestar por la situación de la gasolina. Le imputaron el delito de instigación al odio[[24]](#footnote-24).

También está el caso del locutor **Wilfredo Rodríguez**, quien estuvo detenido cinco días, por denunciar en *Facebook* las irregularidades en la venta de la gasolina. Luego de ello, lo presentaron en tribunales y le imputaron el delito de ultraje al funcionario público y una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días[[25]](#footnote-25).

**El ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión que cuestiona prácticas u omisiones de las autoridades o sectores de poder genera una situación de discriminación contra persona percibidas como “opositoras” en el respeto y garantías de sus derechos humanos**. Con el decreto de estado de alarma y cuarentena se agravaron las represalias, así como la situación social y económica.

* ¿Qué repercusiones a largo plazo se prevé que tendrán la pandemia y las medidas de respuesta en el disfrute de los derechos humanos?

Frente a esta situación de incertidumbre, las medidas seguirán afectando el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos relacionados. El escenario previsible en Venezuela es de recrudecimiento contra la expresión crítica en la medida en que el Estado pretenda mantener “suspendida la información” en una excepcionalidad que podría ser indefinida.

**Internet**

● Internet y los medios sociales se utilizan cada vez más para el trabajo, la educación, la compra de alimentos y otros bienes, el intercambio de información para la concienciación, la libertad de expresión, las ceremonias religiosas, la interacción cultural y social, la consulta y la toma de decisiones políticas. ¿Qué desafíos y obstáculos ha puesto de relieve la pandemia en lo que respecta al acceso a Internet de todas las personas? ¿Ha dado lugar la situación reciente a un aumento de las violaciones de los derechos humanos, el acoso y la intimidación en línea? En caso afirmativo, ¿cómo se ha abordado esta cuestión?

En diez semanas de cuarentena (16 de marzo al 31 de mayo) se registraron 54 casos que manifestados en tres grandes patrones: fallas estructurales y de conectividad, relacionado con apagones eléctricos y caídas de la conexión; bloqueos, ataques o suspensiones de sitios web; y hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por la difusión de informaciones u opiniones en línea.

Al menos 26 personas fueron detenidas, en general por difundir mensajes en línea críticos al gobierno o que cuestiona a autoridades públicas, sea en el contexto de las acciones por la pandemia o en general informaciones u opiniones vinculadas a altos/as funcionarios/as y su círculo cercano. La mayoría de las personas detenidas son ciudadanos/as que no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan las plataformas en línea para emitir opiniones, reportar hechos o compartir ideas; entre ellos docentes, abogados e ingenieros; estos suman el 52% (13).

Más en un reciente informe (16 de marzo al 31 de mayo) <http://espaciopublico.ong/internet-confinado-libertades-linea-cuarentena/>

Informe sobre la situación previa y de contexto <http://espaciopublico.ong/internet-amurallado-acceso-restringido-en-venezuela/>

● ¿Qué enfoque han adoptado las autoridades competentes para monitorear la información en línea relacionada con la pandemia? ¿Se han eliminado algunos contenidos de Internet? En caso afirmativo, ¿qué criterios se aplicaron para decidir que los contenidos específicos debían ser borrados? ¿Se han aplicado medidas específicas contra la incitación al odio en el ciberespacio?

Se aplica una “ley contra el odio” contra personas por expresarse de forma crítica en contra del gobierno y sus prácticas. Este instrumento se empezó a ejecutar desde finales de 2017, y se ha usado en buena medida para criminalizar el discurso público. Carece de legitimidad pues no cumple con los requisitos locales necesarios para establecer leyes y tampoco contempla el test tripartito de proporcionalidad, legalidad y necesidad.

Puedes consultar un análisis sobre la ley aquí <http://espaciopublico.ong/el-discurso-de-odio-excusa-para-la-censura/>

Durante la cuarentena, en relación al derecho a la libertad de expresión en internet, la mayoría de las personas procesadas penalmente han sido acusadas por “delitos de odio”, tras emitir opiniones o ideas a través de redes sociales o incluso mediante mensajería de texto o estados de Whatsapp. Del 16 de marzo al 31 de mayo de 2020 se registraron al menos seis casos de detenciones donde las personas fueron procesadas judicialmente por expresarse a través de Whatsapp. Más en el informe <http://espaciopublico.ong/internet-confinado-libertades-linea-cuarentena/>

**Estadísticas**

1. Sírvase proporcionar datos epidemiológicos sobre las infecciones por COVID-19, la recuperación y las tasas de mortalidad en su país, región o localidad, desglosados por nacionalidad, raza, grupo étnico, religión, pertenencia a pueblos indígenas, edad, género, orientación sexual e identidad de género, niveles de ingreso/pobreza, discapacidad, estatus migratorio o situación de vivienda. ¿Qué grupos de su país se han visto afectados de manera desproporcionada por COVID-19 y qué explicación tendría?

Los portales web dedicados a publicar información oficial actualizada sobre las tasas de infección, mortalidad y recuperación en Venezuela son las páginas web:

* [Covid19.patria.org.ve](http://www.covid19.patria.org.ve)
* <http://www.mpps.gob.ve/>
* <http://www.inhrr.gob.ve/>

Las cifras publicadas en las tres páginas web mencionadas (hasta el 16 de junio de 2020) son las siguientes:

* 3062 casos activos
* 835 casos recuperados
* 26 defunciones

A continuación se presenta tabla extraida de la página web del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (<http://www.inhrr.gob.ve/>) en fecha 16 de junio de 2020:



Sin embargo, las tasas de infección, mortalidad y recuperación no están desglosadas en las categorías señaladas por la pregunta. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, actualmente el salario mínimo es de aproximadamente 2 dólares americanos[[26]](#footnote-26).

Por excelencia, los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19 han sido los sectores populares y la clase baja del país, especialmente las mujeres, niños y adultos mayores. Esto debido a que ante la incapacidad del salario mínimo de cubrir necesidades básicas, la mayoría de la población vive del trabajo diario, lo cual les expone más al virus.

1. Sírvase proporcionar datos desglosados por edad sobre las personas infectadas por el virus COVID-19 y el porcentaje de ellas que viven en instituciones para personas de edad. Sírvase proporcionar datos desglosados por edad sobre las muertes causadas por el virus.

El Estado no suministra esta información.

1. Comparta cualquier información y datos sobre la disponibilidad de servicios de salud para asegurar el acceso a las pruebas, al equipamiento de protección personal y al tratamiento.

En las páginas mencionadas están publicadas todas las medidas de seguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, así como los tratamientos recomendados para los síntomas ocasionados por el virus. Sin embargo, no hay disponible información referente a los inventarios de equipos de protección y medicamentos en hospitales del país.

**Rendición de cuentas y justicia**

● ¿Podría destacar las principales preocupaciones en las quejas recibidas por las instituciones nacionales de derechos humanos, las defensorías del pueblo y los órganos de lucha contra la discriminación en relación con las crisis de COVID-19 y cómo se han abordado?

El Tribunal Supremo de Justicia no ha informado las medidas para conocer el estatus de los procesos judiciales iniciados durante la cuarentena, esto aumenta el retardo procesal y violenta el derecho a la defensa de las víctimas. Alguno de estos casos son detenciones arbitrarias que recibe y reconoce el tribunal penal que esté de guardia como flagrancia.

Las razones de las privativas de libertad en los casos registrados por Espacio Público en el mes de mayo, son por el ejercicio de la libertad de expresión, difusiones de denuncia sobre hechos ilícitos a mano de funcionarios de seguridad del Estado, por protestas por falta de servicios básicos, alimentación y gasolina[[27]](#footnote-27).

Otra de las preocupaciones se debe a los cargos atribuidos a las víctimas mediante leyes que son inconstitucionales, tal es el caso de la ley contra el odio, la constitución básica de forma, fondo y origen que la sustenta la hace ilícita[[28]](#footnote-28). Fue aprobada por la asamblea nacional constituyente[[29]](#footnote-29) el 08 de noviembre de 2017[[30]](#footnote-30).

Espacio Público en conjunto con otras organizaciones manifiesta por medio de comunicados las formas que debe cumplir el Estado venezolano de acuerdo con las exigencias internacionales para resguardar el derecho a la libertad de expresión e información, acceso a la justicia y debido proceso en el contexto de la pandemia[[31]](#footnote-31).

● ¿Podría proporcionar alguna explicación y estadísticas sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el funcionamiento del sistema de justicia, incluidos en los cuerpos de seguridad, la prestación de asistencia jurídica y el funcionamiento de los tribunales?

El bajo funcionamiento del sistema de justicia se debe al cumplimiento del Estado de alarma decretado y extendido por Nicolás Maduro el 13 de marzo de 2020[[32]](#footnote-32) a causa de la pandemia. Esto afecta el acceso a los tribunales y el conocimiento oportuno de la defensa sobre las decisiones de las autoridades en los casos procesados durante la COVID-19.[[33]](#footnote-33)

Los tribunales dejan en suspenso las causas y no corren los lapsos procesales, exceptuando, de acuerdo a la resolución 001-2020 del Tribunal Supremo de Justicia[[34]](#footnote-34), las acciones urgentes. Hasta la fecha no hay explicación exacta por parte del mismo ente de cuáles son las acciones urgentes a las que hace referencia ni cuáles son los tribunales a cargo.

De acuerdo con este pronunciamiento los tribunales penales no pueden interrumpir sus labores, por lo que en la práctica se generó un esquema de guardia para trabajar los actos de flagrancia. Actualmente aunque se encuentre en función un tribunal, no hay despacho.

No hay acceso a los juzgados salvo, para la entrega de diligencias o amparos. El ejercicio de los abogados privados es perjudicado por no tener cercanía a la sede y por falta de información de los alguaciles de la entidad. Esta práctica prohíbe que los abogados tengan acceso a los expedientes, lo que conlleva el desconocimiento de la condición jurídica de las víctimas sometidas a detenciones arbitrarias o excarceladas.

* ¿Qué actividades se suspendieron temporalmente?

El acceso a los tribunales, la actuación procesal, la falta de acceso a los expedientes.

¿Qué medidas se han adoptado para prevenir, investigar o enjuiciar a) el arresto y la detención arbitrarios?

La Fiscalía General de la República, ni la Defensoría de Pueblo, no han emitido comunicados o resoluciones oficiales donde se exprese los planes de trabajo o las medidas para enfrentar arrestos o detenciones arbitrarias. Un tweet del Fiscal General de la República, Tarek William Saab indicó que el Ministerio Público trabajará por guardias debido a la Covid-19.

El 17 de marzo Saab mencionó, a través de su cuenta de twitter, que:

“los fiscales del Ministerio Público deberán observar el cumplimiento de los lapsos que el Código Orgánico Procesal Penal, y demás leyes procesales, dispone para los actos del proceso penal”[[35]](#footnote-35)

“Los Tribunales de Control ejecutarán guardias para efectuar las Audiencias, evitando el retardo procesal y la vulneración de los dchos de las partes, para lo cual se deben tomar las medidas necesarias, como uso de guantes y tapabocas y evitar el contacto entre los presentes”[[36]](#footnote-36)

“Los Tribunales de Juicio se abstendrán de realizar audiencias, tomando en cuenta que la evacuación de pruebas requiere la presencia de personas en la sede del Tribunal”[[37]](#footnote-37)

Los días que la Fiscalía General de la República atiende al público son los lunes, miércoles y viernes. Está prohibido el acceso a la sede de la fiscalía y sólo atiende el fiscal superior para hacer el enlace con la fiscalía correspondiente al caso. Esta información fue corroborada por el equipo de defensa legal de la organización al 18 de junio de 2020.

● ¿De qué manera las restricciones a las reuniones públicas o privadas han afectado a la libertad de expresión y de reunión?

La pandemia en Venezuela es utilizada como argumento para dejar sin efecto el derecho de reunión pacífica. La pandemia pretende encubrir la emergencia humanitaria preexistente en el país, por lo cual existen restricciones severas para el derecho a la reunión y manifestación.

La información sobre la pandemia en Venezuela es muy restringida. Desde finales de febrero de 2020, los reportes de potenciales casos de la Covid-19, sobre protestas por motivos de gasolina u otras causas sociales en Venezuela confrontan más limitaciones informativas. Los trabajadores de los medios, defensores de derechos humanos y líderes sociales no sólo no disponen de ninguna garantía de protección ni permiso de circulación, sino que también padecen dificultades para acceder a combustible, limitando la cobertura en lugares públicos.

La presencia particular de periodistas o de noticias en medios web son motivos para que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano allanen sedes, detengan, confisquen y eliminen arbitrariamente la documentación o información obtenida por ellos durante su jornada laboral. En los peores casos, se han fabricado procesos penales con fines de castigo y censura.

1. Informes publicados por Espacio Público a la fecha:

Situación general del derecho a la libertad de expresión. Enero-Abril de 2020 <http://espaciopublico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-enero-abril-de-2020/>

Coronavirus en Venezuela: Más preguntas que respuestas. <http://espaciopublico.ong/coronavirus-en-venezuela-mas-preguntas-que-respuestas/>

Boletines mensuales:

Marzo: cuarentena informativa en Venezuela <http://espaciopublico.ong/marzo-cuarentena-informativa-en-venezuela/>

Abril: detenciones buscan imponer silencio <http://espaciopublico.ong/abril-detenciones-buscan-imponer-el-silencio/>

Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones <http://espaciopublico.ong/mayo-confinamiento-intimidacion-y-detenciones/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Finanzas Digital (2020) Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.519: Se decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional, por epidemia del coronavirus (COVID-19). Recuperado en: <https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-estado-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/> [↑](#footnote-ref-2)
3. Pandectas Digital (2020). Decreto Nº 4.186, mediante el cual se prorroga por 30 días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.160, de fecha 13 de marzo de 2020, mediante el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional. Recuperado en: <https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/04/decreto-n-4186-mediante-el-cual-se.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. Escribd (2020) GACETA-DECRETO-ESTADO DE ALARMA-12-05-2020-GOE 6535 (1).pdf. Recuperado en: <https://es.scribd.com/document/461429132/GACETA-DECRETO-ESTADO-DE-ALARMA-12-05-2020-GOE-6535-1-pdf#from_embed> [↑](#footnote-ref-4)
5. Finanzas Digital (2020) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.542: Se prorroga por 30 días el Estado de Alarma Nacional para atender la Emergencia Sanitaria del COVID-19. Recuperado en <https://www.finanzasdigital.com/2020/06/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-542-se-prorroga-por-30-dias-el-estado-de-alarma-nacional-para-atender-la-emergencia-sanitaria-del-covid-19/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Banco y Negocios (2020) Plan 7×7: 15 sectores se suman a la flexibilización a partir del #15Jun. Recuperado en: <http://www.bancaynegocios.com/plan-7x7-15-sectores-se-suman-a-la-flexibilizacion-a-partir-del-15jun/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Sala Constitucional del TSJ. número de sentencia Nº 0057. Fecha 24 de marzo de 2020. Ponencia conjunta. Expediente Nº 20-0187. Recuperado en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/309859-0057-24320-2020-20-0187.HTML> [↑](#footnote-ref-7)
8. Sala Constitucional del TSJ. número de sentencia Nº 0058. Fecha 22 de abril de 2020. Ponencia conjunta. Expediente Nº 20-0187. Recuperado en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/309860-0058-22420-2020-20-0187.HTML> [↑](#footnote-ref-8)
9. Sala Constitucional del TSJ. número de sentencia Nº 0063. Fecha 21 de mayo de 2020. Ponencia conjunta. Expediente Nº 20-0198. Esta sentencia en cuestión no puede ser consultada en la página del Tribunal Supremo de Justicia. [↑](#footnote-ref-9)
10. ACNUDH (2019). Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos. Recuperado en <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S> [↑](#footnote-ref-10)
11. Foro por la Vida (2017). La “ley contra el odio” es ilegítima por su forma, fondo y origen. Recuperado en <http://espaciopublico.ong/la-ley-odio-ilegitima-forma-fondo-origen/> [↑](#footnote-ref-11)
12. Espacio Público (2018). El discurso de odio, excusa para la censura. Análisis de ley. Recuperado en <http://espaciopublico.ong/el-discurso-de-odio-excusa-para-la-censura/> [↑](#footnote-ref-12)
13. Espacio Público (2020) Gobernador del Zulia amenazó a médico por alertar sobre el coronavirus. Recuperado en <http://espaciopublico.ong/gobernador-del-zulia-amenazo-a-medico-por-alertar-sobre-el-coronavirus/> [↑](#footnote-ref-13)
14. Acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas. [↑](#footnote-ref-14)
15. Supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas. [↑](#footnote-ref-15)
16. Espacio Público (2020) Marzo: cuarentena informativa en Venezuela. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/marzo-cuarentena-informativa-en-venezuela/> [↑](#footnote-ref-16)
17. Espacio Público (2020) Abril: detenciones buscan imponer el silencio. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/abril-detenciones-buscan-imponer-el-silencio/> [↑](#footnote-ref-17)
18. Espacio Público (2020) Detienen a bioanalista por publicar posible caso de Coronavirus

<http://espaciopublico.ong/detienen-a-bioanalista-por-publicar-posible-caso-de-coronavirus/> [↑](#footnote-ref-18)
19. Espacio Público (2020) Detienen arbitrariamente a dos periodistas en 24 horas. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/detienen-arbitrariamente-a-dos-periodistas-en-24-horas/> [↑](#footnote-ref-19)
20. Espacio Público (2020) Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones. Recuperado en: <https://docs.google.com/document/d/12n75xKEPCjDZtYH4-ICqh230o4E3D6E7naubeGzRbqk/edit> [↑](#footnote-ref-20)
21. Espacio Público (2020) Detienen a médico por publicar una imagen contra Maduro en su Whatsapp. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/detienen-a-medico-por-publicar-una-imagen-contra-maduro-en-su-whatsapp/> [↑](#footnote-ref-21)
22. Espacio Público (2020) Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/mayo-confinamiento-intimidacion-y-detenciones/> [↑](#footnote-ref-22)
23. Espacio Público (2020) Excarcelan al periodista Eduardo Galindo tras permanecer 19 días detenido. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/excarcelan-al-periodista-eduardo-galindo-tras-permanecer-19-dias-detenido/> [↑](#footnote-ref-23)
24. Espacio Público (2020) GNB detiene a ciudadano por expresarse en redes sociales. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/gnb-detiene-a-ciudadano-por-expresarse-en-redes-sociales/> [↑](#footnote-ref-24)
25. Espacio Público (2020) Excarcelan a locutor detenido por denunciar irregularidades con la gasolina en Delta Amacuro. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/excarcelan-a-locutor-detenido-por-denunciar-irregularidades-con-la-gasolina-en-delta-amacuro/> [↑](#footnote-ref-25)
26. Fuente: <https://www.dw.com/es/suben-el-salario-m%C3%ADnimo-en-venezuela-ahora-son-46-d%C3%B3lares/a-53264867> [↑](#footnote-ref-26)
27. Espacio Público. Junio 04, 2020. Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/mayo-confinamiento-intimidacion-y-detenciones/> [↑](#footnote-ref-27)
28. Espacio Público. Noviembre 10, 2017. Ley contra el odio es ilegítima por su forma, fondo y origen. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/la-ley-odio-ilegitima-forma-fondo-origen/> [↑](#footnote-ref-28)
29. La ANC fue convocada mediante una interpretación viciada del artículo 348 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, que establece que el Presidente puede tener la iniciativa, lo que no se identifica con el poder de convocatoria. El presidente Nicolás Maduro omitió el artículo 347 de la Constitución Nacional, el cual establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario, de allí que el único que puede jurídicamente convocar una Asamblea Nacional Constituyente son los ciudadanos a través de un referéndum nacional. [↑](#footnote-ref-29)
30. Telesurtv.net. 09 de noviembre de 2017. Entra en vigencia ley contra el odio en Venezuela. Recuperado en: <https://www.telesurtv.net/news/Entra-en-vigencia-Ley-contra-el-Odio-en-Venezuela-20171109-0047.html> [↑](#footnote-ref-30)
31. Espacio Público. Marzo 25, 2020. Covid-19: Comunicado de la alianza regional por la libre expresión e información. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/covid-19-comunicado-de-la-alianza-regional-por-la-libre-expresion-e-informacion/>; <http://espaciopublico.ong/foro-por-la-vida-estado-de-alarma-no-puede-ser-excusa-para-violar-derechos-humanos/> [↑](#footnote-ref-31)
32. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6519, decreto N° 4.160: <https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-estado-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/> [↑](#footnote-ref-32)
33. Espacio Público. Mayo 18,2020. Foro por la vida: Estado de alarma no puede se excusa para violar derechos humanos. Recuperado en: <http://espaciopublico.ong/foro-por-la-vida-estado-de-alarma-no-puede-ser-excusa-para-violar-derechos-humanos/> [↑](#footnote-ref-33)
34. Resolución del TSJ 001-2020: <http://ley.tuabogado.com/leyes/resoluciones/tsj-resolucion-001-2020-ningun-lapso-procesal-correra-desde-el-16-marzo-hasta-13-abril-2020-ambas-fechas-inclusive> [↑](#footnote-ref-34)
35. Twitter, @TareckWilliamSaab, 17 de marzo. Recuperado en: <https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1240000800744714240> [↑](#footnote-ref-35)
36. Twitter, @TareckWilliamSaab, 17 de marzo. Recuperado en: <https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1240001291532808192> [↑](#footnote-ref-36)
37. Twitter, @TareckWilliamSaab, 17 de marzo. Recuperado en: <https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1240001413733810176?ref_src=twsrc%5Etfw> [↑](#footnote-ref-37)